

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8952-2014
CARATULADO : ALARCÓN / HELP S A

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil dieciocho

VISTOS.

A fojas 7 y siguientes, comparece don **FRANCISCO JAVIER ACEITUNO CONTRERAS**, abogado, domiciliado en Avenida El Bosque N° 0123, oficina 203, comuna de Las Condes, Santiago, en representación convencional de doña **MARTA PATRICIA ALARCÓN MADRID**, ejecutiva de ventas, domiciliada en Camino De La Superiora N° 6721, Alto Macul, comuna de La Florida, Santiago, e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, en contra del **HELP S.A.**, del giro de Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas en Vehículos de Emergencia Móvil, representada legalmente por su gerente general don Miguel Labowitz Garrido, ignora profesión, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 3001, piso 1 y 4, comuna de Las Condes, Santiago, en base a los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

A fojas 181 y siguientes, la demandada evacuó la contestación de la demanda, solicitando el rechazo de la misma, con costas.

A fojas 191 y siguientes, la demandante evacua la réplica y a fojas 201 y siguientes, se evacuó la dúplica por la sociedad demandada.

A fojas 260, se llevó a cabo la audiencia de conciliación obligatoria, no compareciendo ninguna de las partes, razón por la cual la conciliación, a que fueron llamadas las partes no de produjo.

A fojas 262, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

A fojas 659, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 7 y siguientes, comparece don **FRANCISCO JAVIER ACEITUNO CONTRERAS**, en representación convencional de doña **MARTA PATRICIA ALARCÓN MADRID**, e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, en contra del **HELP S.A.**, a objeto que se declare la responsabilidad civil que le cabe, y se le condene a indemnizar: **a)** el daño moral en la suma de \$150.000.000.-, o la cifra mayor o menor que el Tribunal estime conceder; **b)** reajustes e intereses correspondientes, conforme al IPC acumulado desde la fecha de la prestación médica reprochada, hasta el día de pago efectivo de la indemnización señalada, más el interés corriente acumulado; y, **c)** que se condene en costas a la demandada.

Relata que durante la madrugada del día 29 de mayo del año 2009, la señora Marta Inés Madrid Huerta (QEPD), madre de su representada, de 75 años de edad, con antecedentes y diagnóstico de diabetes, dislipidemia (niveles de colesterol y triglicéridos elevados), arterioesclerosis en tratamiento e hipertensa,



Foja: 1

se encontraba sola en su domicilio ubicado en calle Cerro Morro de Arica N° 0487, comuna de Maipú, ciudad de Santiago, comienza a padecer intensos dolores torácicos transfixiantes (que compromete el pecho y la espalda), en el brazo izquierdo, además de náuseas, vómito aislado y sudoración.

Señala que desesperada, alrededor de las 04:30 am se comunica telefónicamente con su sobrina Eva Cailly Madrid, transmitiéndole su situación de salud, ante lo cual ésta avisa a don Nelson Alarcón Madrid, uno de los hijos de la Sra. Marta, para que se trasladara a la brevedad al domicilio de su madre.

Narra que la Sra. Cailly, teniendo en cuenta que doña Marta Alarcón contrató los servicios de Help S.A. para su madre, decide llamar inmediatamente a la central de operaciones dicha entidad -a eso de las 04:49 am-, la que conforme al relato recepcionado y a la sintomatología de dolor torácico descritos, clasifica la emergencia en alerta roja, la que de acuerdo a la información proporcionada por los procedimientos de Help, corresponde a riesgo vital inminente.

Detalla que, la ambulancia llega al domicilio de la Sra. Madrid alrededor de las 05:20 am, lugar en el cual se encontraba doña Eva, y el médico cirujano de Help, don Sergio Alberto Kohnenkamp Bravo -a pesar de los síntomas descritos y del hecho que la empresa Help mantenía una ficha médica de la paciente, como asimismo datos aportados por la propia central de operaciones- diagnostica una cefalea tensional, sin la realización de exámenes o medios de apoyo, instrumentos que estuvieron a su disposición en la ambulancia.

Refiere que no obstante, la sintomatología que presentaba la paciente era un dolor torácico, sudoración y haber sufrido un episodio de vómito, éstos no fueron interpretados por el médico como signos de complicación, contrariando así a la Lex Artis médica prevista para estos casos, que le obligaba a realizar una evaluación clínica en la búsqueda de todos los factores que le puedan servir de base para la acertado diagnóstico.

Advierte que, ignorando los antecedentes mórbidos de la paciente (hipertensión, diabetes y arterioesclerosis), decide efectuar un tratamiento ambulatorio farmacológico, inyectándole Ketorolaco, medicamento analgésico y antiinflamatorio, que tiene filtración renal y por lo tanto, provoca aumento de la presión arterial, por lo mismo, contraindicado en pacientes hipertensos. Así, el médico de Help, con este diagnóstico de cefalea tensional, da de alta la emergencia.

Sostiene que el estado de doña Marta Madrid no varió, evolucionando con dolor torácico y sudoración, hasta que alrededor de las 13:45 pm, encontrándose en su casa acompañada de sus hijos y vecinos, se puso cianótica, respirando entrecortado y exhalando profundamente, comenzando así una sintomatología de pérdida de conciencia que motivó nuevamente una llamada a la central de operaciones de Help, la que califica de emergencia de riesgo vital con alerta roja, mientras la telefonista comienza a dar instrucciones como reanimarla mediante procedimientos de primeros auxilios.

Precisa que a las 14:20 pm llegó la ambulancia al domicilio de la Sra. Marta, procediendo a revisar el cuerpo de la paciente, constatando ausencia de signos vitales, acto seguido conectan el monitor para efectuar un electrocardiograma, evidenciándose la asistolia (ausencia de latidos cardíacos) y en consecuencia, su fallecimiento a raíz de un taponamiento cardíaco, y secundariamente, la rotura del ventrículo izquierdo.



Foja: 1

Hace presente que, el médico de la primera consulta no sopesó -y a través de una conducta de crasa ignorancia en apreciación de cosas que necesariamente deben saberse, y que por sus características no pueden ser confundidas al momento de diagnosticarlas-, la información sensible registrada en Help en el llamado de emergencia, como el dolor torácico, su carácter transfixiante y la sudoración, que son propias del infarto de miocardio.

Afirma que la excusa es inadmisible, ya que por tratarse de casos que ocurren a diario en Help, el facultativo debió reconocerlos inmediatamente, en especial, cuando el origen de la sintomatología descrita evidentemente correspondía a un infarto y que no fue diagnosticado y, por lo tanto, no tratado oportunamente por el Dr. Kohnenkamp, quien asumió una actitud pasiva y negligente.

Indica que lo expuesto, no es más que una reconstrucción sistemática y expositiva de los hechos ocurridos, confrontados con los antecedentes registrados en la respectiva ficha clínica de la víctima y que se encuentran en la carpeta investigativa del Ministerio Público, fiscalía de Maipú, RUC N° 0900548422-4.

En cuanto al derecho postula que, existe consenso en caracterizar al contrato de servicios médicos como un contrato bilateral, de carácter oneroso, conmutativo, principal y consensual; y que, entre doña Marta Patricia Alarcón Madrid y Help S.A. existió uno, el cual se perfeccionó por el acuerdo de voluntades mediante la suscripción de documentos o formularios.

Plantea que, en lo relativo a la conducta que un médico debe proporcionar al atender a su paciente, la literatura especializada coincide en que, por las características y la rapidez con que se instauran las alteraciones del estado general en una emergencia con sintomatología de dolor torácico transfixiante, tiene relación con la gravedad del proceso base.

Analiza que, los hechos posteriores demuestran que esa sintomatología de la paciente correspondía a un infarto en curso, y que la conducta debió ser la exploración complementaria tras la anamnesis, mediante la realización de un electrocardiograma de urgencia y la determinación enzimática en sangre que pudieron resultar orientativos respecto de la causa del dolor, y el resultado, que debió ser positivo, implicaba la hospitalización de urgencia en una unidad coronaria.

Comenta que en ningún momento de la atención médica, el doctor Kohnenkamp señaló a la paciente o a sus familiares las posibilidades o el origen de la supuesta cefalea tensional, de sus tratamientos farmacológicos (ketorolaco) y de los riesgos de la sintomatología.

A mayor abundamiento, prosigue, fue tan incompleto el diagnóstico, que el Dr. Kohnenkamp como médico tratante, ni siquiera utilizó los medios que tenía a su alcance en la ambulancia, como tampoco, ordenó la realización de exámenes complementarios que pudieran determinar con claridad si era una cefalea tensional o no. En otras palabras, el profesional no agotó todos los medios científicos que tenía su disposición para determinar de la forma más aproximada, el posible cuadro sintomatológico de la paciente, tratándose en consecuencia, de un error de diagnóstico, sin que Help pueda excusarse diciendo que se trataba de un cuadro complejo.

Expone que, el estándar de cuidado profesional, esto es, el nivel de cuidado exigible al médico tratante, requiere que el profesional médico se comporte como una persona razonable y diligente, es decir, una persona que adopta todas las



Foja: 1

medidas que satisfacen las expectativas de seguridad que el paciente tiene respecto de su capacidad como experto; en este sentido, el doctor Kohnenkamp no se comportó en forma razonable y diligente cuando omitió la realización de un electrocardiograma de urgencia y la determinación enzimática en sangre, simples exámenes que hubieran justificado razonablemente el traslado de la paciente a una unidad coronaria y poder realizarle una intervención quirúrgica.

Manifiesta, y como segundo punto, que respecto al consentimiento informado, éste debió contener información relativa al servicio médico que fue prestado, referida a los éxitos del tratamiento, como también de los posibles riesgos, complicaciones y efectos posteriores a la primera consulta, siendo esto último de gran relevancia. Sin embargo, continúa, como resultado de la investigación realizada por la Fiscalía del Ministerio Público, su parte ha tenido acceso a las Fichas Médicas de la víctima donde no existe constancia de la firma de un consentimiento informado.

Asevera, que la omisión en la firma del consentimiento informado, constituye una negligencia más del Dr. Kohnenkamp, ya que doña Marta Madrid se sometió a una atención de emergencia, de riesgo vital, sin dimensionar los reales riesgos y complicaciones de la atención, traspasando de esta manera, el médico tratante todo el riesgo al paciente, actuando fuera de los límites de la Lex Artis.

Describe que el consentimiento informado, es sólo uno de los elementos centrales de los servicios médicos; además, el médico o facultativo de la medicina tiene distintas alternativas de tratamiento, informar desde el inicio de la atención hasta su término de todas las contingencias que se produzca, el secreto profesional, entre otras.

Como tercer punto, explica, que el Dr. Kohnenkamp, no interpretó correctamente la sintomatología de la llamada de emergencia, ya que los hechos posteriores demuestran que dichos síntomas presentados por la paciente, correspondían a un infarto en curso.

Señala que la conducta debió ser la exploración complementaria tras la anamnesis a la paciente, mediante la realización de un electrocardiograma de urgencia que pudieron resultar, como medio de apoyo tecnológico de carácter orientativo respecto de la causa del dolor, pues sin él -esencial en una emergencia de riesgo vital-, cercenó toda opción de sobrevida de su paciente, ya que los signos presentados son usuales de un infarto.

Colige entonces, que la monitorización en una unidad especializada, habría permitido el diagnóstico inmediato del taponamiento y la posibilidad de descomprimirlo quirúrgicamente, y, que en este caso la no hospitalización por falta de diagnóstico positivo de infarto, se tradujo en no iniciar tratamiento anticoagulante, que habría podido impedir la perforación o, de haberse presentado ésta igualmente, impedir la descompresión inmediata por punción o cirugía abierta.

Señala como cuarto punto que, redundando en todo lo señalado el hecho que, el médico tratante, soslayando los antecedentes mórbidos de la paciente a saber 75 años de edad, diabética y con antecedentes de hipertensión y arterioesclerosis en tratamiento, procede a inyectarle ketorolaco.

Agrega que, las personas que toman medicamentos antiinflamatorios sin esteroides (diferentes a la aspirina) como el ketorolaco, pueden tener mayor riesgo de tener un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, que las personas que



Foja: 1

no lo hacen, los que podrían ocurrir de forma imprevista y hasta causar la muerte. No es recomendable este medicamento con enfermedades al corazón, un ataque cardíaco, o un accidente cerebrovascular, o mini accidente cerebrovascular, o si se tiene o alguna vez han tenido colesterol alto, hipertensión (alta presión arterial), sangrando o problemas con la coagulación, o diabetes.

Infiere que el médico tratante, al inyectar ketorolaco revela ignorancia o negligencia en la materia, o revela que no revisó la ficha médica de la paciente, o que no procedió a efectuar una correcta anamnesis, o simplemente no verificó correctamente el examen físico; pero como sea, en un caso así, dado los antecedentes mórbidos y proceso base sintomatológico de la paciente, no podía recibir ese tipo de medicación.

Estima, que todas las conductas médicas recién referidas, son constitutivas de negligencia grave, y que el médico Sr. Kohnenkamp no cumplió con sus obligaciones, impuestas por la Lex Artis, por lo que, en virtud del contrato de servicios que su representada celebró con la demandada Help S.A., ésta debe responder por los incumplimiento contractuales y perjuicios que emanan del contrato, por el irremediable daño que le ha ocasionado su personal médico durante las atenciones de emergencia que negligentemente le prestaron a su difunta madre; y, conforme al artículo 1547 del Código Civil, será Help S.A. la que tendrá la carga probatoria de demostrar que cumplió diligentemente con sus respectivas obligaciones de medios que le imponía el contrato de servicio.

Antes de entrar al análisis de cada uno de los elementos de la responsabilidad, aclara que el sujeto activo de esta acción indemnizatoria está compuesto por la Sra. Marta Patricia Alarcón Madrid, quien contrató los servicios de Help S.A. para que atendieran a su madre.

Recalca que la negligencia radica en el error de diagnóstico del personal de Help durante la primera atención y en los incumplimientos de obediencia a la Lex Artis de utilizar los medios de apoyo (electrocardiograma) para la certeza del diagnóstico y tratamiento.

Expresa que, el solo hecho de que el personal médico no haya buscado todos y cada uno de los factores del cuadro sintomatológico de la paciente, en especial, con el apoyo de los medios de equipamiento que tenían a su disposición como el electrocardiograma, hace sino concluir que todo diagnóstico o tratamiento que viniera posteriormente resultara errado, fallido o contraproducente, tal y como ocurrió al inyectar ketorolaco.

Luego, desglosa cada elemento de la responsabilidad contractual como sigue, señalando:

1.- Existencia de un contrato: su parte cuenta con documentación que acredita que el contrato de servicios médicos se formalizó, esto es la relación contractual entre doña Marta Patricia Alarcón Madrid con la demandada.

2.- Incumplimiento del contrato: existe en la especie un incumplimiento de contrato, dado que en este caso el personal de Help S.A. no presta la conducta calificada que le compete conforme a la Lex Artis, radicado en el error de diagnóstico cometido durante la primera atención, sin utilizar ningún medio complementario de apoyo para la certeza de dicho diagnóstico y su tratamiento. Añade que en el terreno de la responsabilidad contractual, el incumplimiento se presume culpable, conforme lo establece el artículo 1547 del Código Civil, por lo tanto corresponderá a Help S.A. acreditar que cumplió diligentemente el contrato de servicios médicos celebrado con mi representada.



Foja: 1

3.- El daño: La paciente estuvo sometida a un proceso de estrés y deterioro progresivo hasta su fallecimiento en angustiosas circunstancias. Help S.A. se debe considerar como garante de la salud e integridad de sus pacientes y afiliados, ofreciéndoles que frente a una emergencia o urgencia médica, enviará un móvil al lugar del incidente, y en caso de riesgo vital, una enfermera apoyará telefónicamente dando las instrucciones mientras llega el móvil. Señala la página web de Help (www.help.cl) que *“sus pacientes serán estabilizados en el lugar del incidente, luego son trasladados si es necesario. Al ser trasladado a un Centro Médico Asistencial se acompañará al paciente hasta que sea internado.”*

Help S.A. a través de su personal médico, debe garantizar a sus pacientes una atención eficiente, diligente y oportuna, ya que cuenta con todos los recursos, humanos y tecnológicos, para realizar de la manera más diligente la prestación médica a la que se obligan; además, la empresa lucra con el ejercicio de sus servicios, por lo tanto, lo que menos puede esperar un paciente o afiliado, es que sea atendido con la mayor rapidez y diligencia posible, y en este caso constituye un daño indesmentible el hecho que su representada contratara los servicios médicos de salud y asistencia domiciliaria con la finalidad de asegurar para su madre una atención de primer nivel, obteniendo sin embargo, un servicio deficiente que determinó su lamentable deceso.

4.- Nexo causal entre el incumplimiento y el daño: existe, pues si suprime mentalmente la atención negligente del médico de Help, la muerte de la Sra. Madrid no se hubiera verificado; en otras palabras, la atención diligente -lo que implica dimensionar los síntomas y riesgos de la paciente cuando fueron informados por Help al médico tratante previo a su llegada- habría significado que el médico empleara todos los medios para descartar la evolución del infarto, o en su caso, la decisión de realizar exámenes de apoyo para un correcto diagnóstico y tratamiento, escenario en el cual, la Sra. Madrid habría sobrevivido al cuadro o en caso de agravamiento, hubiera enfrentado la crisis asistida con apoyo médico.

Los hechos posteriores demuestran que la sintomatología de la paciente correspondía a un infarto en curso, y que la conducta del personal médico de Help debió ser la exploración complementaria tras la anamnesis, mediante la realización de un electrocardiograma de urgencia y la determinación enzimática en sangre que pudieron resultar orientativos respecto de la causa del dolor, y resultado, que debió ser positivo, implicaba la hospitalización de urgencia en una unidad coronaria.

Así las cosas, basta el incumplimiento en el empleo de los medios por parte del personal de Help para que, sine qua non, se obtenga un resultado fallido o contraproducente como así posteriormente quedo a la vista después de la primera consulta de emergencia.

Manifiesta que para cumplir con el contrato suscrito, la empresa demandada introdujo voluntariamente al Dr. Kohnenkamp con la finalidad de cumplir la prestación a la que se había obligado, que era la de realizar un diagnóstico completo, lo que incluye: relato del paciente, anamnesis, toma de exámenes, empleo diligente de medios, etc, para salvar la vida de la madre de su representada.

Entonces, analiza, aplicando las normas relativas al estatuto contractual, el deudor Help S.A., en este caso, debe responder por el hecho propio, esto es, de los que tiene a su cargo (Dr. Kohnenkamp), médico asalariado dependiente de la



Foja: 1

empresa de la cual se sirvió para poder ejecutar las prestaciones médicas a satisfacción de su cliente.

Relata que, como Help S.A. proveyó de los medios materiales y el personal médico para tratar a la madre de su representada Sra. Madrid, queda de manifiesto que a la empresa y al Dr. Kohnenkamp se les exige el cumplimiento y conducta de obediencia a sus protocolos y los estándares de cuidado conforme a *lex artis*, y que las infracciones cometidas por el personal médico de la institución demandada, se transmiten en la forma de presunciones de culpa a dicha entidad, del cual son dependientes.

En consecuencia, continúa, a Help S.A. no sólo es posible imputarle su responsabilidad por el hecho propio, además podrá responder en autos por el hecho ajeno, según las reglas generales establecidos especialmente en el artículo 2320 del Código Civil, que reza: *"Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado."*

Expone que, las responsabilidades de Help S.A., ya sea por el hecho propio o el hecho ajeno, hay que distinguirlas, pues como su parte desconoce la relación contractual del Dr. Kohnenkamp con Help S.A., esto es, si es un profesional a honorarios o media un contrato de trabajo, es decir mediando subordinación conforme a los artículos 2320 y el 2322 (hecho del dependiente) del Código Civil. Agrega que ambas normas son el fundamento legal de la responsabilidad de Help S.A. que se reprocha sea cual sea la relación contractual entre el personal médico y la empresa.

Manifiesta que, en términos prácticos ningún centro médico, clínica, menos Help S.A. en este caso, puede eludir sus responsabilidades a consecuencia de su relación contractual con el médico negligente, dado que para cumplir con las diversas prestaciones médicas para sus pacientes que contratan sus servicios, se sirve de un personal médico que ella misma selecciona, estando obligado a ejecutar el contrato de servicios médicos de buena fe según lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil.

Infiere, por lo recién señalado, que no puede eludir su deber de vigilancia respecto de las personas que ejercen labores médicas en el marco de sus servicios de emergencia o urgencia domiciliarias; el deber de vigilancia se concreta a través de la dirección médica, la que debe velar por la seguridad de sus pacientes en cada atención y salvar sus vidas; y dada la naturaleza de la prestación a la cual se obligó Help S.A., en donde tanto la atención profesional como los servicios de atención de emergencia, consulta y tratamiento resultan indivisibles para la consecución del objetivo de la prestación, es que la responsabilidad de dicha empresa es ineludible al haber proveído el personal médico para atender a la madre de su representada, contribuyendo a la producción del resultado lesivo.

En cuanto a los perjuicios demandados, define al daño moral como la lesión inmaterial o agravio inferido por un sujeto al derecho subjetivo inherente a la persona de otro sujeto, agregando que para nuestra Jurisprudencia, importan daño moral indemnizable, los dolores, sufrimientos, aflicciones, preocupaciones, depresiones y molestias inferidos a la víctima y a su entorno familiar directo.

Describe que su representada ha tenido que soportar todo el daño con ocasión de estos hechos, toda vez que el perjuicio afectivo y la carga personal del cuidado de la salud y el fallecimiento de su madre, en circunstancias angustiosas, es inmenso, doloroso y difícil emocionalmente de sobrellevar.



Foja: 1

Comenta, que la contemplación de la mañana del 29 de mayo de 2009 del padecimiento de su madre, su deterioro físico y su fallecimiento, sin ninguna asistencia, es un daño psíquico y emocional irreparable para su representada y su entorno familiar, sumado a la frustración de contratar el servicio de Help S.A. que asegura a sus clientes medios diligentes para salvar vidas.

Plantea que si bien, ninguna cifra compensará el daño causado, solicita una indemnización que represente la magnitud del daño ocasionado y que sea proporcional y ejemplar a ese daño, en un contexto en el cual Help S.A. no empleó adecuadamente los medios con obediencia a la Lex Artis.

Afirma que para salvar vidas, aunque no se pueda garantizar el logro de dicho objetivo, se trata de una obligación de empleo de medios diligentes, no media superior, es decir, extremar y poner todo el empeño, saber, diligencia y los medios que se dispongan para obtener la curación del enfermo. En consecuencia, solicita se indemnice el daño moral, en la suma de \$150.000.000.-

SEGUNDO: Que, a fojas 181 y siguientes, la parte demandada contesta la demanda, rechazándola en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Expone, ante el escenario fáctico y jurídico que la actora propone como fundamento y base de su acción indemnizatoria de perjuicios en sede contractual, las siguientes las excepciones o defensas de fondo:

1. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INTENTADA

Refiere que es un hecho incuestionable, que su representada fue válidamente notificada de la demanda el 30 de enero de 2015, y por ende sólo desde esa fecha la acción que se ejerce es capaz de producir efectos jurídicos.

Agrega que, conforme con lo dispuesto en los artículos 2492, 2514 y 2515 del Código Civil, el plazo para ejercer la acción civil que se intenta en la demanda -indemnización de perjuicios por el incumplimiento de una obligación de hacer- es de 5 años, contados desde la fecha en que ocurrió el supuesto incumplimiento respectivo, constituyéndose así en mora el deudor; por lo que en el caso de marras, el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por responsabilidad contractual que se ejerce en la demanda, a lo más prescribió el 29 de Mayo del 2014, día coincidente con el transcurso de 5 años contados desde el 29 de Mayo del 2009, fecha de la atención médica domiciliaria en la que, según la contraria, su representada habría actuado con negligencia incumpliendo con sus obligaciones contractuales.

Advierte entonces, que la acción civil que se ejerce en la demanda, sólo se ha intentado después de 5 años de ocurrido el hecho que la funda, período de tiempo que no fue interrumpido de acuerdo con lo establecido en el artículo 2518 del ya citado cuerpo legal, por lo que dicha acción es del todo improcedente, por extemporánea, ya que la institución de la prescripción ha generado todos sus efectos.

2. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE COSA JUZGADA

Asimismo, opone a la demanda la excepción perentoria de cosa juzgada contemplada en el N° 1 del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la propia demandante reconoce en forma expresa que los mismos hechos que se cuestionan en la demanda, ya fueron materia de un investigación penal seguida en la causa RUC 0900548422-4 de la Fiscalía Local de Maipú, RIT N° 13417-2009 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, proceso judicial que, se encuentra terminado por declaración de sobreseimiento definitivo, firme y ejecutoriado, conforme con la causal prevista en el artículo 250 letra A) del



«RIT»

Foja: 1

Código Procesal Penal, esto es, cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito.

Explica que, de la interpretación literal y sistemática de los artículos 179, 180 y 310 del Código de Procedimiento Civil, se puede concluir que cuando se cumple alguna de las hipótesis de hecho contempladas en los tres numerales del primer artículo citado, la sentencia penal produce el efecto de cosa juzgada en materia civil, y consecuentemente no es lícito para el Juez civil tomar en consideración pruebas incompatibles con los hechos ya establecidos en la sentencia criminal, tal como ha ocurrido con los hechos materia de autos, que ya fueron objeto de decisión jurisdiccional en sede penal, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, decisión que en definitiva ponderó los mismos hechos materia de autos y un idéntico cuestionamiento a los mismos.

Conforme a lo anterior, prosigue, es que opone la excepción perentoria de cosa juzgada del artículo 179 N° 1 ya citado, pues la situación excepcional de esa variante de cosa juzgada, cuya especialidad hace primar su aplicación por sobre la regla general del artículo 177 del mismo código, prescinde del requisito de triple identidad, bastando para su procedencia que se cumplan con las hipótesis de hecho que la misma norma contempla, y teniendo especial consideración la causa legal por la que se sobreseyó definitivamente la causa penal previa, no cabe lugar a dudas que en la especie se cumplen los requisitos del referido artículo, esto es, la existencia de una sentencia penal que declare el sobreseimiento definitivo en razón a que los hechos investigados no constituyen delito, lo que aplicado al caso de marras se traduce en la clara certeza y evidencia judicial que en los hechos sometidos al conocimiento de este Tribunal, no existe la culpabilidad indispensable para poder configurar el ilícito penal o el incumplimiento contractual que la contraria indistintamente invoca como presupuesto de su pretensión indemnizatoria.

Hace presente que, los sobreseimientos definitivos y las sentencias dictadas en sede penal producen el efecto de cosa juzgada refleja, lo que implica una producción de efectos en terceros que no participaron en el juicio criminal, pero que actualmente mantienen una relación jurídica con las partes que en él participaron; por ende, es aún más legítimo y justo que Help S.A. se haga valer de esta institución, porque si bien no fue parte en el juicio penal, en éste se discutieron los mismos hechos que sirven de fundamento a la acción indemnizatoria que se ejerce en su contra en estos autos.

Asevera que, las condiciones de sujeto procesal activo y pasivo de un litigio generan la relación jurídica exigida por la cosa juzgada refleja, haciendo aplicable a la demandada civil, lo fallado en el juicio criminal previo.

3. EN SUBSIDIO, RECHAZO DE LA DEMANDA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE DOÑA MARTA ALARCÓN MADRID

Sostiene que, el tenor literal y expreso del libelo de demanda, da cuenta que el contrato cuyo presunto incumplimiento se reclama, corresponde a aquel celebrado por la actora y Help S.A. a favor o beneficio de doña Marta Madrid Huerta. Añade que la descripción de la relación contractual que en su oportunidad vinculó a la actora, la paciente y su representada, precisamente corresponde a lo que doctrina se denomina una estipulación a favor de otro, figura que se encuentra consagrada y regulada legalmente en el artículo 1449 del Código Civil, que dispone: *“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no*



«RIT»

Foja: 1

tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado...”

Expresa que es jurídicamente irrefutable, que el único titular de la acción indemnizatoria emanada por el presunto incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios médicos celebrado entre la actora y su representada, es la paciente Sra. Marta Madrid Huerta, pues fue ella la persona a favor de quien se estipuló la prestación de servicios médicos domiciliarios.

4. EN SUBSIDIO, RECHAZO DE LA DEMANDA POR LA INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA QUE SE RECLAMA

Indica que si bien su parte coincide con la demandante, en el sentido que el ámbito de responsabilidad en el cual deben evaluarse los perjuicios, resulta necesario precisar que las obligaciones impuestas a Help S.A., en cuanto involucran la prestación de una atención médica domiciliaria de urgencia o emergencia, son de medios y no de resultado, como en forma errada lo da a entender la contraria, al sostener infundadamente en su libelo pretensor que el profesional médico que atendió a la paciente se encontraba obligado a efectuar un diagnóstico certero e infalible y a evitar el posterior fallecimiento de la Sra. Marta Madrid Huerta.

Postula que resulta físicamente imposible que su representada, a través del médico que atendió a la paciente, se haya obligado a la obtención de un resultado preciso y determinado, como sería el efectuar el diagnóstico de infarto ya evitar la muerte posterior de la paciente, ello por la simple razón que las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios médicos domiciliarios que vinculó a las partes de la litis, precisamente tiene por objeto la práctica y/o ejercicio de la medicina, la cual no es una ciencia exacta, y cuya principal variable es que las enfermedades que afectan al ser humano obedecen a procesos evolutivos, de curso distinto y particular en cada enfermo, y que muchas veces o bien se desarrollan de manera silente y sólo se hacen perceptibles cuando el cuadro patológico está prácticamente establecido, o bien se presentan de forma súbita e imprevisible siendo imposible evitar su curso natural.

Manifiesta que conforme lo dispone el artículo 1556 del Código Civil, que prescribe: *"La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento"*, se deberá determinar y/o ponderar si la demandada de autos incumplió total o parcialmente sus obligaciones o bien retardó el incumplimiento.

Menciona que el artículo 44 del mismo Código, establece que es culpa leve la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios, de manera tal que en la apreciación de falta de cuidado, necesariamente debe hacerse una comparación entre la conducta del supuesto autor del daño y la que habría observado un hombre prudente en el desempeño de sus actividades; y que para determinar si el profesional médico de Help que atendió a la paciente faltó o no al cuidado y diligencia debidos, necesariamente corresponderá ponderar las circunstancias existentes y conocidas a ese momento por el agente.

En tal escenario, esgrime, cualquier otro médico cirujano o prestador de salud institucional en igualdad de condiciones habría actuado idénticamente como



«RIT»

Foja: 1

se hizo por el personal de su representada al momento de atender en su domicilio a la Sra. Madrid.

En lo que respecta a los elementos generadores de responsabilidad contractual, arguye lo siguiente:

a. En cuanto a la existencia de un incumplimiento culpable de las obligaciones asumidas por Help S.A.: su representada cumplió con todas y cada una de las obligaciones que le imponía el contrato que celebró con el actor, por cuanto diligente y oportunamente puso a su disposición los servicios profesionales de un médico cirujano debidamente acreditado y calificado para prestar la atención requerida por la paciente.

En este sentido, reitera, corresponde recordar que en sede penal ya se estableció que la conducta desplegada por el Dr. Sergio Kohnenkamp Bravo en la atención de la paciente, se ajustó a la lex artis de la ciencia médica, siendo su proceder carente de culpa y/o negligencia, tanto así que se declaró el sobreseimiento definitivo de la causa penal por la causal prevista en la letra a) del artículo 250 del Código Procesal Penal.

b. En cuanto al nexo de causalidad: según lo dispuesto en el artículo 1558 del Código Civil sólo son indemnizables aquellos daños que puedan imputarse a malicia o negligencia de otra persona, requisito que resulta imposible de configurar en el caso de marras, toda vez que ya existe un pronunciamiento judicial que descarta toda hipótesis de culpa, negligencia o dolo en la atención médica domiciliaria que es cuestionada por la contraria.

Expone que conforme con la literatura médica, el taponamiento cardíaco secundario a una rotura ventricular izquierda -causa de muerte de la paciente-, es un evento de presentación súbita y de curso mortal, de manera tal, que aun cuando se estimase que la atención médica brindada por el Dr. Kohnenkamp adolece de errores, tal conducta bajo ninguna circunstancia es la causante del deceso de la paciente y del daño moral alegado por la actora, toda vez que tales eventos son solo consecuencia de un accidente cardíaco súbito y mortal que no se encontraba presente al momento de la atención médica cuestionada en la demanda.

Concluye entonces, que el potencial de causalidad de la atención médica que la contraria califica como negligente, con el posible daño alegado por la actora, es indiferente al derecho, pues de existir sólo sería imputable a eventos completamente ajenos a la esfera del actuar de su representada, y que por ende, la eximen de toda responsabilidad.

c. En cuanto al daño reclamado: Sobre el particular, niega expresamente la existencia de los daños reclamados en la demanda, toda vez que, aun cuando la contraria lograra demostrar que la Sra. Alarcón sufrió un perjuicio afectivo que califica como daño moral, tenemos que ello sólo es la consecuencia del natural sentimiento que puede generar el fallecimiento de un familiar cercano, hecho que como ya se dijo no se encuentra vinculado con la correcta atención médica domiciliaria prestada por Help S.A.

5. EN SUBSIDIO, RECHAZO DE LOS IMPROCEDENTES REAJUSTES E INTERESES RECLAMADOS EN LA DEMANDA.

De acuerdo a lo ya expuesto, rechaza absolutamente la procedencia que se le condene a pagar indemnización pecuniaria alguna, pero no obstante lo anterior, y para el evento que el Tribunal diera lugar a la pretensión intentada, aclara que al ser un procedimiento declarativo, y consecuencialmente de condena, bajo ninguna



Foja: 1

perspectiva jurídica tal obligación de dar una suma de dinero podría reajustarse y generar intereses desde una época anterior a su nacimiento, pues la obligación sólo existirá y será exigible cuando la sentencia de término quede firme y ejecutoriada.

TERCERO: Que, a fojas 191, la parte demandante evacua la réplica, rebatiendo los argumentos expuestos por la contraria en la contestación, como sigue.

1. En cuanto a la excepción de prescripción.

Hace presente, en rechazo a la excepción planteada, que la empresa demandada debió considerar que su parte tuvo que cumplir, previo a la presentación de su demanda, con la exigencia de la Ley 19.966, la que dispone en su artículo 45: *“El plazo total para el procedimiento de mediación será de sesenta días corridos a partir del tercer día de la primera citación al reclamado; previo acuerdo de las partes, este plazo podrá ser prorrogado hasta enterar ciento veinte días, como máximo. (...)”*

Durante el plazo que dure la mediación se suspenderá el término de prescripción, tanto de las acciones civiles como de las criminales a que hubiera lugar”.

Señala que, tal como consta en el certificado de mediación frustrada, documento que no fue objetado por la contraria, queda de manifiesto que este fue extendido por la mediadora María Angela Bambach, el día 26 de marzo de 2014, y que el ingreso del reclamo y solicitud de mediación N° 12189, es de fecha 21 de junio de 2013. Entonces -continúa-, considerando que el proceso terminó el 26 de marzo de 2014, conforme al artículo 45 de la referida norma, se entiende que el proceso duro 9 meses.

Analiza que efectivamente, la acción contractual debía prescribir el día 29 de mayo de 2014, pero en virtud de la suspensión del plazo de la prescripción mencionada y contemplada por la Ley 19.966, la acción quedó suspendida hasta el 1 de marzo de 2015, y si la demanda fue notificada el 30 de enero de 2015, la acción no se encuentra prescrita para todos los efectos legales.

2. En cuanto a la excepción de cosa juzgada.

Refiere que, la cosa juzgada es relativa, tiene límites, dada sus cualidades propias, en cuanto a los sujetos a los cuales afecta (identidad legal de personas), en cuanto al objeto y en cuanto a la causa de pedir, lo cual tiene una lectura distinta en el proceso penal, dada la distinta naturaleza de los procedimientos, y en principio, la cosa juzgada afecta sólo a las partes que hubieren formado parte de la relación procesal en el cual se hubiere dictado la sentencia que la genera.

Manifiesta que la regla general se encuentra en el artículo 3 del Código Civil, que dispone, al efecto, en su inciso segundo: *“Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”*, con lo cual elimina lo que se conoce como precedentes judiciales.

Por esta misma disposición, se pregunta por los límites de la cosa juzgada en materia civil, encontrando ayuda en lo que dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que basta con revisar la norma citada para que este Tribunal constate que la empresa Help S.A. no fue parte de la investigación penal a la cual alude la contraria.

Comenta que el sobreseimiento penal, sólo habrá terminado la fase penal de la discusión, pero su representada en esta causa pretende hacer valer la responsabilidad civil de la empresa Help, que no tiene por objeto buscar una



Foja: 1

sanción punitiva del médico involucrado, sino la reparación del daño causado por la muerte de su madre.

Sostiene que, conforme al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, por regla general la sentencia que sobresee por inexistencia del delito o cuasidelito penal produce cosa juzgada en el juicio civil, pero no así respecto de la negligencia del empresario.

Así las cosas, argumenta, se demandó en autos la responsabilidad de Help por el hecho ajeno al tercero civilmente responsable, de acuerdo con los artículos 2320 inc. 4° y 2322 del Código Civil, preceptos según los cuales, la empresa o institución responde por los hechos ilícitos que con dolo o culpa comentan aquellas personas que estén bajo su cuidado o dependencia.

Explica que, la empresa demandada reconoce la existencia de un contrato, por lo que siendo un estatuto contractual -1547 inciso 3° del Código Civil- ella deberá acreditar que cumplió con sus respectivas obligaciones o que intervino un caso fortuito o fuerza mayor.

Aclara que Help S.A. o cualquier empresa o clínica, cualquiera que sea el estatuto de responsabilidad debe responder por defectos en la organización de sus servicios, encontrándonos en el terreno del hecho ajeno, es decir, cuando existe un contrato de servicios de salud e introduce su personal médico para cumplir dichas obligaciones, terceros ajenos a la relación contractual de su representada con Help. Asimismo, Help puede responder el hecho propio basado en el deber de vigilancia, cuya fuente es la autoridad del primero respecto del segundo, lo cual se refleja en la subordinación del médico y el personal auxiliar al Director Clínico de Help, como también a sus protocolos en caso de urgencia.

3. En cuanto a la falta de legitimación de la demandante.

En este punto expresa que, la estipulación a favor de otro es una modalidad de contrato, triangular en sus efectos, aunque bilateral en su formación, y la defensa de Help S.A. confunde el hecho que efectivamente sólo el beneficiario puede exigirle el cumplimiento de sus obligaciones del contrato a Help conforme al artículo 1449 del Código Civil, ya que el contratante no puede pedir que se cumpla las obligaciones o prestaciones a su favor. Sin embargo, la presente estipulación incide en un contrato bilateral, en virtud del artículo 1489 del Código Civil, el cual se establece que *"en todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios"*, queda de manifiesto que dicha acción de indemnización sólo le corresponde a surepresentada como contratante, ya que se estima que existe acción cuando hay interés y el estipulante siempre contratará por interés, pues nunca se realiza un acto jurídico sin una razón, sin un motivo o sin un interés, situación en la cual no se encuentra el beneficiario.

Agrega que el artículo 1536 del Código Civil, no hace sino reiterar la posición en el ejercicio de una acción como contratante cuando puede demandar la cláusula penal estipulada, esto es, indemnización de perjuicios convencional en caso de incumplimiento en la estipulación en favor de otro.

Por todo lo anteriormente expuesto, postula que este argumento debe ser rechazado.

4. En cuanto a las alegaciones de inexistencia de los elementos de que configuran la responsabilidad de Help.



Foja: 1

Estima que ningún centro médico, clínica, menos Help S.A. en este caso, puede eludir sus responsabilidades a consecuencia de su relación contractual con el médico involucrado dado que, para cumplir con las diversas prestaciones médicas para sus pacientes que contratan sus servicios, se sirve de un personal médico que ella misma selecciona, estando obligado a ejecutar el contrato de servicios médicos de buena fe según lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil, no pudiendo, además, soslayar su deber de vigilancia respecto de las personas que ejercen labores médicas en el marco de sus servicios de emergencia o urgencia domiciliarias.

Infiere que, dada la naturaleza de la prestación a la cual se obligó Help S.A., en donde tanto la atención profesional como los servicios de atención de emergencia, consulta y tratamiento resultan indivisibles para la consecución del objetivo de la prestación, es que estamos frente a obligaciones contractuales indivisibles debidos por la demandada, donde la responsabilidad de Help es ineludible, toda vez que ha proveído al personal médico para atender a la madre de su representada, contribuyendo a la producción del resultado lesivo, por lo que es coautor del mismo.

Precisa que, es la culpa de la demandada en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales las que resultan indivisibles conforme al objetivo de salvar una vida, por lo que concurre de todas formas a la generación y producción del resultado.

CUARTO: Que, a fojas 201 y siguientes la demandada evacúa dúplica, solicitando el total e íntegro rechazo de la demanda con costas, conforme a los siguientes argumentos:

1. Señala que, la afirmación realizada por la demandante en la réplica, respecto que la prescripción de su acción indemnizatoria se suspendió supuestamente durante 9 meses, en razón del proceso mediación ante la Superintendencia de Salud es completamente falsa, toda vez que:

a) En virtud de lo dispuesto en los incisos 1° y 3° del artículo 45 de la Ley N° 19.966, en cuanto establecen que "El plazo total para el procedimiento de mediación será de sesenta días corridos a partir del tercer día de la primera citación al reclamado; previo acuerdo de las partes, este plazo podrá ser prorrogado hasta enterar ciento veinte días, como máximo" y que "durante el plazo que dure la mediación se suspenderá el término de prescripción, tanto de las acciones civiles como de las criminales a que hubiere lugar.", es jurídicamente irrefutable que la suspensión de la prescripción de las acciones sólo opera durante el plazo que dure la mediación, y el plazo de duración de ésta sólo se contabiliza desde el tercer día siguiente a la fecha en que el mediador designado haya despachado la pertinente citación a primer audiencia, hasta el plazo máximo de 120 días que la ley establece como límite.

b) Conforme con lo anterior, afirma que la demandante yerra en su escrito de réplica, al intentar sostener que su acción se encontraba vigente al 30 de enero de 2015, al notificar válidamente la demanda a su representada, toda vez que es incuestionable que la suspensión de la prescripción de la acción que se ejerce en la demanda como máximo podría haberse extendido por un periodo de 120 días, cuestión que nos lleva a que indefectiblemente como máximo, venció el 26 de septiembre de 2014, fecha coincidente con el transcurso de 5 años contados desde el 29 de mayo de 2009, fecha que se cometió el hecho que sustenta la



«RIT»

Foja: 1

acción, sumado, además, el tiempo máximo en que la prescripción podría haber estado suspendida (120 días).

c) Por todo lo expuesto, es indudable que en la especie corresponde acoger la excepción de prescripción alegada, pues aun cuando se estimase que la prescripción podría estar suspendida por un plazo superior a 120 días, resulta errado lo aseverado por la contraria en el sentido de que el plazo de la acción civil ejercida habría estado suspendido durante 9 meses (tiempo que supuestamente habría durado la mediación), pues sólo se podría llegar a contabilizar dicho tiempo se considerara suspendida la prescripción desde que la demandante efectuó la solicitud de mediación, cuestión que no resulta correcta, toda vez que dicho plazo de suspensión, tal como lo señala la misma ley, debe ser contabilizado desde la primera citación efectuada por el mediador.

Asimismo, consta en el certificado de mediación frustrada acompañado por la actora en su demanda que la mencionada citación no pudo ocurrir sino después del 25 de Septiembre de 2013, fecha en que fue notificada su designación como mediadora a doña María Angélica Arancibia Bambanch, por lo que en atención a que la citación a mi representada no pudo haber sido efectuada antes de la mencionada notificación, como máximo, se podría entender suspendida la prescripción entre el 25 de Septiembre de 2013 y el 26 de Marzo de 2014, lo que arroja un total de 6 meses y 1 día que llevaría a dar por vigente la acción ejercida por la demandante, hasta el 30 de Noviembre de 2014.

2. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, respecto a la improcedencia que reclama la demandante, por no cumplir con los requisitos necesarios para ser alegada, corresponde señalar lo que sigue:

a) En efecto, en los escritos presentados en la etapa de discusión y en los antecedentes de la causa penal sobreseída definitivamente, consta en forma indubitada que en ambas sedes jurisdiccionales, penal y civil, los hechos sometidos a la decisión judicial son los mismos, esto es, el proceso de atenciones médicas prestadas por su representada a doña Marta Madrid Huerta el día 29 Mayo del año 2009, hechos que la contraria ha calificado indistintamente como constitutivos de ilícito penal (cuasidelito de lesiones previsto y sancionado en los artículos 490, 491, 492 Y 397 N°2 del Código Penal), y de un incumplimiento contractual atribuido a Help S.A.

b) Que la contraria señala que "la cosa juzgada afecta sólo a las partes que hubieren formado parte de la relación procesal en el cual se hubiere dictado la sentencia que la genera" y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil referente a la triple identidad esta no concurriría en el caso de marras, planteamiento del todo incorrecto a la luz de la situación excepcional de esta variante de cosa juzgada (cuya especialidad hace primar su aplicación por sobre la regla general del artículo 177 del mismo código) prescinde del requisito de triple identidad, bastando para su procedencia que se cumplan con las hipótesis de hecho que la misma norma contempla. Agrega que, la única manera de interpretar la disposición legal del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, es considerándola como una excepción a la normativa general de la cosa juzgada, de lo contrario, no hubiese sido necesario establecerla en un artículo diferente, con numerales que describen en forma precisa los supuestos fácticos que deben concurrir para que la sentencia penal produzca el efecto de cosa juzgada en materia civil.



Foja: 1

c) Advierte que, no cabe duda que se cumplen los requisitos exigidos en el n° 1 del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la existencia de una sentencia penal que declare el sobreseimiento definitivo en razón a que los hechos investigados no constituyen delito, lo que aplicado al caso de marras se traduce en la clara certeza y evidencia judicial que en los hechos sometidos al conocimiento de este Tribunal, no existe la imputabilidad indispensable para poder configurar la responsabilidad pretendida que la contraria indistintamente invoca como presupuesto de su pretensión indemnizatoria.

d) A mayor abundamiento, corresponde señalar que los sobreseimientos definitivos y las sentencias dictadas en sede penal producen el efecto de cosa juzgada refleja, lo que implica una producción de efectos en terceros que no participaron en el juicio criminal, pero que actualmente mantienen una relación jurídica con las partes que en él participaron, pues existe un claro interés o dependencia de lo zanjado previamente por un Tribunal de la República, por ende es aún más legítimo, que Help S.A. se haga valer de esta institución, porque si bien no fue parte en el juicio penal, en éste se discutieron los mismos hechos que sirven de fundamento a la acción indemnizatoria que se ejerce en su contra en estos autos. Indudablemente, las condiciones de sujeto procesal activo y sujeto procesal pasivo de un litigio generan la relación jurídica exigida por la cosa juzgada refleja, haciendo aplicable a la demanda civil de autos lo fallado en juicio criminal previo.

e) Que asimismo, respecto de la demandada Help S.A., corresponde también excluirla de responsabilidad, ya que el efecto de cosa juzgada en este caso es de carácter universal, esto es, no sólo produce su efecto respecto de aquellos que fueron parte en el proceso criminal, sino que también alcanza al tercero civilmente responsable, puesto que para que se origine su responsabilidad es presupuesto esencial la existencia de un ilícito penal cometido, lo que en definitiva no ocurrió.

QUINTO: Que, para un adecuado desarrollo y análisis de la acción deducida en autos, resulta indispensable emitir pronunciamiento sobre la excepción de prescripción opuesta por la demandada en su escrito de contestación.

Así, de lo expuesto en su contestación y réplica, la empresa demandada argumenta que al tiempo de haberse notificado válidamente la demanda, esto es, al 30 de enero de 2015, sumado a que el hecho que invoca la demandante como causante de los perjuicios sufridos aconteció el 29 de mayo de 2009, la acción ejercida estaría prescrita, pues se ha intentado después de 5 años de ocurrido el hecho que la funda, periodo de tiempo que, además, no fue interrumpido.

Por su parte la actora, en su escrito de réplica sostiene que, previo a la interposición de la demanda debió cumplir con las exigencias de la Ley 19.966, y que durante el plazo que durara la mediación obligatoria, tal como lo dispone el artículo 45 de dicho cuerpo legal, se suspende el término de prescripción. Así las cosas, señala que: (...) *el ingreso del reclamo y solicitud de mediación N° 12189, es de fecha 21 de Junio de 2013, y considerando que el proceso terminó el 26 de marzo de 2014, conforme al artículo 45 de la referida norma, se entiende que el proceso duro 9 meses, quedando suspendida la acción hasta el 1 de marzo de 2015, por lo que no se encontraría prescrita.*

Luego, la empresa demandada al evacuar el trámite de la réplica, ratifica su postura, en cuanto a que la acción interpuesta se encuentra efectivamente



«RIT»

Foja: 1

prescrita, en virtud de lo dispuesto por los incisos 1° y 3° del artículo 45 de la ley N° 19.966, pues si bien la suspensión de la prescripción de las acciones opera durante el plazo de la mediación -contado desde el tercer día siguiente a la fecha en que el mediador designado haya despachado la pertinente citación a primera audiencia-, dicho periodo no puede superar los 120 días.

SEXTO: Que, del análisis de lo expuesto por las partes en las distintas etapas procesales referidas, cabe hacer presente, que no existe controversia entre las partes, en cuanto a la fecha en que acaeció el hecho que sustenta la acción, esto es, el día 29 de mayo de 2009 así como tampoco en cuanto a la fecha de notificación de la demanda, la cual se practicó el día 30 de enero de 2015.

Que como primera cuestión, se debe dejar asentado que en el ámbito de responsabilidad sanitaria rige la ley 19.966, normativa de carácter especial que regula dicha materia, y que prima ante la general, por lo que el plazo de prescripción estará dado por lo que ella prescriba y no por el que establezca el Código Civil.

En este orden de ideas, dicha ley dispone en su artículo 40 que: *“La acción para perseguir esta responsabilidad prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde la acción u omisión”*. Entonces, habida consideración a que ambas partes convienen en que el día **29 de mayo del 2009**, ocurrió el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales de parte de Help S.A., y que se invoca como causante de los perjuicios que la demandante dice haber sufrido, resulta evidente que la acción se encuentra prescrita.

SEPTIMO: Que, ciertamente, previo a ejercer acciones jurisdiccionales con el fin de obtener la reparación de los daños ocasionados por algún prestador de salud privado o pública, la ley 19.966 impone que el interesado haya sometido su reclamo a un procedimiento de mediación, período en el cual efectivamente, se suspende el término de prescripción (artículo 45), plazo en todo caso, que no podrá exceder a los 120 días. El mismo precepto, proporciona la fórmula para calcular la duración de este procedimiento, el cual correrá a partir del tercer día de la primera citación al reclamado, fecha que para el caso que nos ocupa -según certificado de mediación frustrada N°12.189-2013- correspondería al 25 de octubre de 2013.

Que en consecuencia, desde esa fecha procedería contar, cuatro meses como máximo para suspender los plazos de prescripción, o sea, en el caso de autos, hasta el 25 de febrero de 2014.

OCTAVO: Que, no obstante lo consignado en el motivo precedente, ello resulta irrelevante en el caso sublite pues la actora, recién el 21 de junio de 2013, presentó su requerimiento por escrito ante la Superintendencia de Salud para someterse a procedimiento de mediación, fecha en que su acción ya se encontraba prescrita.

Que a mayor abundamiento, cabe consignar por consiguiente que no se suspendió ningún plazo, pues la acción que funda la demanda, se encuentra indefectiblemente prescrita desde el 29 de mayo de 2013, razón por la cual no cabe sino acoger la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada.

NOVENO: Que, atendido lo consignado precedentemente, inoficioso resulta pronunciarse respecto de las demás alegaciones hechas valer por las partes de este juicio.



«RIT»

Foja: 1

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1438, 1545, 1546, 1547, 1558, 1560, 1698, 2492, 2514, 2515 del Código Civil; 144, 160, 170, 310 del Código de Procedimiento Civil; y, ley 19.966, se resuelve:

I. Que se acoge la excepción de prescripción interpuesta por Help S.A, y en consecuencia se rechaza la demanda incoada a fojas 7 y siguientes.

II. Que habiendo resultado totalmente vencida la parte demandada, se la condena al pago de las costas.

Regístrese, notifíquese y archívense en su oportunidad.

PRONUNCIADA POR DON LUIS EDUARDO QUEZADA FONSECA. JUEZ SUPLENTE.

AUTORIZA DON JUAN JOSE LAZCANO RUIZ. SECRETARIO AD-HOC.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Marzo de dos mil dieciocho.**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>